DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL SECTOR

El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, crea el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, correspondiéndole la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia económica y de reformas para la mejora de la competitividad, las telecomunicaciones y la sociedad de la información, y para la transformación digital y el desarrollo y fomento de la inteligencia artificial, así como el resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico.

Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:

- La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
- La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
- La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

1. SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA

El Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establece que la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, bajo la superior dirección de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ejercerá las funciones previstas en el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el ámbito de sus competencias, relativas a la tesorería del Estado, la gestión de la deuda pública, la política financiera y la regulación de entidades financieras, los mercados de capitales, seguros y reaseguros, la capitalización y fondos de pensiones, la política de prevención del blanqueo de capitales y la representación en las instituciones financieras internacionales y en los correspondientes foros internacionales económicos y financieros, la orientación, propuesta, coordinación y seguimiento de ejecución de la política económica y de las políticas sectoriales y los análisis y previsiones macroeconómicos, así como la necesaria interlocución sobre estos asuntos con la Unión Europea y otros Organismos Económicos y Financieros Internacionales.

Asimismo, la persona titular de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa forma parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y ejercerá las funciones de secretaria de dicha Comisión.

De la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa dependen directamente los siguientes órganos directivos:

- La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, con rango de Subsecretaría, de la que a su vez depende la Dirección General de Tesoro y Política Financiera.
- La Dirección General de Política Económica.
- La Dirección General de Análisis Macroeconómico.
- La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

1.1. Competencias en materia de política económica y financiera

La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa realiza las actuaciones necesarias para la propuesta, ejecución y seguimiento de la política económica y financiera del Gobierno.

Concretamente corresponde a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, a través de sus centros directivos, las siguientes competencias en materia de política económica:

- El análisis y propuesta de las directrices y orientaciones de la política económica, así como el estudio, elaboración y coordinación de propuestas normativas sobre reformas estructurales en materia económica.
- El/la titular de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa es miembro y ejerce las funciones de Secretaría de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), que, entre otras competencias, es la encargada de estudiar las directrices generales de política económica y velar por la coordinación y coherencia de las políticas de los distintos departamentos ministeriales.
- La interlocución de España ante la Comisión Europea en el marco del Semestre Europeo y la coordinación del Programa Nacional de Reformas y el seguimiento de la ejecución de las medidas previstas en él, en particular respecto al cumplimiento de las recomendaciones para España de la Unión Europea.
- El seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco de la política económica general, en especial las medidas de reforma.
- El seguimiento de las medidas de política económica adoptadas para valorar su eficacia en la consecución de los fines perseguidos. En este contexto, le corresponde también la propuesta de políticas públicas a evaluar y el seguimiento de las conclusiones

de dichas evaluaciones. Estas actuaciones se realizan en coordinación con el ministerio sectorial afectado y, cuando se trate de políticas de gasto, la evaluación y seguimiento se hará conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

- El análisis de la incidencia en la política económica general de las políticas en los ámbitos fiscal y presupuestario, laboral, protección social, pensiones, sistema educativo, consumo, sistema judicial y seguridad jurídica ex ante, derecho societario y sistema sanitario y la participación en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos. La elaboración de estudios, informes y propuestas de actuación en estos ámbitos en coordinación con los ministerios sectoriales competentes.

- El estudio, análisis e iniciativa de propuestas de reforma de la regulación de las reservas de actividad, las profesiones reguladas y los colegios profesionales.

- El estudio, análisis o propuesta de las actuaciones dirigidas a mejorar en España el tratamiento de la insolvencia.

- El impulso y coordinación de las iniciativas orientadas a la mejora del clima de negocios en general, incluyendo especialmente iniciativas orientadas a la creación y crecimiento empresarial, así como de atracción de talento a la economía española, sin perjuicio de la colaboración y coordinación con otros departamentos ministeriales competentes. También le corresponde la formulación de propuestas para su reforma e informe de las presentadas por otros departamentos y la representación internacional de la Administración General del Estado en este ámbito.

- La vigilancia por la coherencia de las políticas económicas sectoriales con la política económica general, apoyando la coordinación de las diferentes políticas sectoriales.

- El análisis y la elaboración de informes sobre propuestas normativas y de actuación con impacto económico, entre otros, en los ámbitos siguientes: telecomunicaciones, digitalización, audiovisual y sector postal, sector energético, transportes, infraestructuras, vivienda y suelo, industria, comercio y apoyo a la internacionalización, transición ecológica, ciencia e innovación, patentes, turismo y otros sectores que impacten en la productividad y competitividad de la economía como pueden ser, especialmente, aquellos que se encuadran en la denominada economía colaborativa, así como las cuestiones relacionadas con el reto demográfico, para analizar su incidencia en la política económica general. En particular, en el ámbito de las telecomunicaciones y de acuerdo con la normativa sectorial vigente, la emisión de informes preceptivos sobre la definición y análisis de mercados de comunicaciones electrónicas y la valoración de la asequibilidad de los precios incluidos en el servicio universal.

- La elaboración de informes, estudios y el análisis de la incidencia en la política económica general de las propuestas normativas relativas a tarifas, peajes, tasas, precios regulados u otros precios del sector público con implicaciones sobre el nivel general de precios.
- La preparación, coordinación, tramitación y supervisión de las instrucciones que, conforme al Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, el Gobierno otorga al Instituto de Crédito Oficial.
- El estudio del ciclo de vida empresarial, incluyendo las empresas de base tecnológica de nueva creación (startups) y, cuando sea apropiado, los trabajadores autónomos.
- El ejercicio de las funciones de la Secretaría de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios.
- El estudio y fomento de la mejora de la regulación económica, en particular en el sector servicios, y el seguimiento y participación en iniciativas comunitarias e internacionales relacionadas con la mejora de la regulación económica.
- La representación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en los debates sobre cuestiones regulatorias de carácter económico que tengan lugar en el ámbito de las Conferencias Sectoriales.
- El análisis, fomento y propuesta de iniciativas de reducción o eliminación de barreras a la unidad de mercado y al acceso y al ejercicio de las actividades económicas.
- La valoración de las concentraciones económicas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
- La elaboración de las propuestas normativas en materia de defensa de la competencia.
- La elaboración de las propuestas normativas en materia de seguros y planes de pensiones.
- La representación de España en el ámbito internacional en materia de competencia sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, incluyendo ayudas públicas, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la CNMC y de las funciones de coordinación asumidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y en el Grupo de Expertos para la

implementación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

– Las propias de la Autoridad Nacional de Coordinación del Instrumento de Apoyo Técnico de la Comisión Europea (TSI).

Por otra parte, a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa le corresponde, entre otras funciones, elaborar las previsiones macroeconómicas oficiales del Gobierno relativas a la economía española que acompañan a los Presupuestos Generales del Estado, al Plan Presupuestario y al Programa de Estabilidad, así como de las previsiones de la zona euro y de las principales economías del entorno internacional. Igualmente se encarga de elaborar las previsiones de los principales indicadores coyunturales de actividad, empleo y precios para la economía española, y desarrollar y adaptar los instrumentos cuantitativos orientados a la previsión y al seguimiento de la coyuntura económica, al igual que mantener y explotar las bases de datos de indicadores económicos. A ello hay que añadir la coordinación y elaboración del Programa de Estabilidad, conforme a lo establecido en el Código de Conducta del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la interlocución de España ante la Comisión Europea en el marco del Semestre Europeo, así como ejercer la interlocución con los principales organismos y foros nacionales e internacionales en materia de previsiones económicas y la representación de España en los Grupo de Previsiones de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

Asimismo, y a través de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, lleva a cabo la coordinación y la representación del Reino de España en el Comité Económico y Financiero de la Unión Europea y el Grupo de Trabajo del Eurogrupo, así como en sus grupos de trabajo respectivos, participando en los trabajos del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (Consejo ECOFIN) y del Eurogrupo; la coordinación y la representación del Reino de España en los grupos de trabajo del Consejo encargados de la negociación, seguimiento y revisión de los elementos que conforman la gobernanza económica europea, así como la representación permanente y la coordinación del Reino de España en diversos organismos financieros internacionales (BEI, FEEF, MEDE, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OCDE, Club de París,...), en el G20 y en el Consejo de Estabilidad Financiera, y tiene la representación de la Administración General del Estado en el Comité de Servicios Financieros de la Unión Europea.

Por lo que se refiere al programa de Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado, abarca dos áreas diferenciadas: la gestión de la Deuda Pública con el objetivo de

cubrir la necesidad de financiación del Estado; y el área de tesorería, que se ocupa de las funciones de gestión de la tesorería del Estado, ordenación de pagos, Caja General de Depósitos y otorgamiento de avales.

Las actuaciones a desarrollar en el ámbito financiero abarcan las siguientes competencias:

- Adaptación del marco normativo que regula los mercados financieros a las exigencias del entorno económico, determinadas en gran medida por la adecuación a la normativa comunitaria y por las variaciones en los ciclos económicos que afectan a todos los mercados.

- Obtener la financiación para cubrir la necesidad de endeudamiento del Estado, derivada de la ejecución de la política económica y presupuestaria del Gobierno. Esta actividad se complementa con la adopción de medidas dirigidas a desarrollar los mercados financieros y promover la inversión institucional y privada en deuda del Estado, con el fin de abaratar los costes de emisión y facilitar la ejecución de la política financiera del Gobierno.

- Coordinar todos los temas monetarios y financieros en el Comité Económico y Financiero de la Unión Europea, y estar presentes en aquellos Comités Técnicos de la Unión Europea en materia de entidades de crédito, seguros, planes y fondos de pensiones, mercados financieros, instituciones de inversión colectiva y otras materias en el marco de sus competencias, así como en el Comité de Mercados Financieros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

- Coordinar con las Autoridades Europeas de Supervisión Bancaria, de Valores y de Seguros y Pensiones de Jubilación, las materias relativas a entidades de crédito, seguros, planes y fondos de pensiones, instituciones de inversión colectiva y otras materias en el marco de sus competencias.

- El control y supervisión del ejercicio de la actividad aseguradora y de mediación de seguros, así como la de los planes y fondos de pensiones, tanto en lo referente a sus instituciones, como a las personas relacionadas con los mismos, a efectos de ofrecer a los asegurados partícipes, beneficiarios y terceros perjudicados, una protección adecuada de sus derechos.

- Definir la posición del Reino de España respecto a la deuda externa que el Estado español ostenta como acreedor, así como la negociación, reestructuración, conversión y gestión, bilateral y multilateral, de la misma.

Por otra parte, a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa se le adscriben las funciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuya actividad principal consiste en el desarrollo, la elaboración y difusión estadística. La labor del Instituto continuará siendo objeto de un esfuerzo especial a lo largo del próximo período presupuestario para un mejor conocimiento de la realidad demográfica, económica y social de nuestro país, así como para la adecuada articulación de medidas de política económica. El Plan Estadístico Nacional constituye el principal instrumento ordenador de la actividad estadística de la Administración del Estado, determinando las operaciones a realizar con carácter obligatorio, y unas líneas estratégicas de actuación que dirigen la actividad estadística. Además, en la ejecución de operaciones estadísticas como en las líneas estratégicas juegan un papel importante las directrices establecidas por los reglamentos de la Unión Europea. Adicionalmente, el INE es responsable de la formación del Censo Electoral y de la gestión del Padrón.

1.2. Actuaciones de política económica y financiera

Para 2023, las actuaciones en materia de política económica y financiera se concretan en:

- Impulso de la aplicación de los principios de mejora de la regulación y del fomento de la cooperación entre Administraciones.

La ineficiente regulación y la falta de cooperación entre Administraciones Públicas impide a las empresas aprovechar las oportunidades de economías de escala y alcance lo que desincentiva inversiones, impide el crecimiento de la demanda de factores productivos y, en definitiva, reduce la productividad, la competitividad, el crecimiento económico y el empleo.

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) establecía un marco de referencia de buena regulación de todas las actividades económicas a respetar por todas las Administraciones Públicas. El principio de eficacia nacional de dicha Ley fue considerado inconstitucional, aunque el resto de principios de buena regulación (necesidad y proporcionalidad, no discriminación, etc.) y sus instrumentos siguen vigentes. Esta ley es una norma de aplicación continua, lo que implica no sólo que la normativa anterior sectorial debe adaptarse a ella, sino que toda la nueva normativa debe igualmente respetar sus principios.

Los mecanismos previstos en la LGUM están ya plenamente operativos. Con el objetivo de fomentar la mejora de la regulación económica en el marco de dicha ley, teniendo en cuenta el reparto de competencias entre las diferentes Administraciones

Públicas, se considera que las opciones de política económica se deben seguir focalizando en el incremento de la cooperación interadministrativa y el fomento de los mecanismos de participación e iniciativa del sector privado ya previstos en la LGUM. Así, por ejemplo, se prevé continuar con iniciativas de tipo formativo, proyectos de mejora de la difusión de la norma, iniciativas de incremento de la transparencia, de tipo informativo y de consolidación de la doctrina. Especialmente, entre otras cuestiones, se ha previsto el impulso de las relaciones de cooperación interadministrativa entre los puntos únicos de contacto y el refuerzo de la cooperación con las conferencias sectoriales y con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Asimismo, se ha previsto la puesta en marcha y continuación de los trabajos de una nueva Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios (constituida en 2021) presidida por la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Estas actuaciones están orientadas a garantizar una plena y efectiva aplicación de los principios de mejora de la regulación en el acceso y ejercicio de las actividades económicas y el funcionamiento eficiente de los instrumentos previstos en la Ley.

- Actuaciones en materia de mercado interior y competencia.

A lo largo de 2023, se deben abordar diversas cuestiones en materia de mercado interior y competencia, que en un momento como el actual resultan sin duda más importantes por los debates actualmente en curso en materia de autonomía estratégica y recuperación frente a la crisis. En esta línea, corresponde señalar que la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 obligará a desarrollar diversas actividades y participar en la organización de foros, como el día europeo de la competencia.

- Mejora de la protección del cliente financiero.

La litigiosidad de los consumidores con los comerciantes no ha dejado de aumentar en los últimos años. Ello ha provocado que las demandas judiciales se acumulen en los juzgados y tribunales. Paradójicamente, pese a su saturación, el sistema actual tampoco es capaz de asegurar que el cliente disponga de un mecanismo eficiente para resolver controversias muy numerosas y de baja cuantía, puesto que iniciar la vía judicial requiere la contratación (y la previa provisión de fondos) de abogado y procurador. Este coste expulsa una buena parte de las demandas del sistema judicial y hace que el sistema judicial resulte inadecuado para este tipo de controversias.

Ante esta realidad, que también existe en otros Estados miembros de la Unión Europea, la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, y por la que

se modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE, fomenta el establecimiento de sistemas alternativos de resolución de controversias entre consumidores y comerciantes. Con ello se persigue que los consumidores tengan cauces ágiles y baratos que les permitan resolver satisfactoriamente sus problemas con los comerciantes.

La Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, tiene en cuenta la especial relación entre los clientes financieros y sus entidades, motivo por el cual prevé que para la resolución de litigios de consumo en el sector financiero, será creada por ley, y comunicada a la Comisión Europea, tras su acreditación por la autoridad competente, una única entidad, con competencias en este ámbito.

Esta ley obligará a las entidades financieras a participar en los procedimientos ante dicha entidad de resolución alternativa de litigios para el ámbito de su actividad. El resto de entidades acreditadas que den cobertura a reclamaciones de consumo de todos los sectores económicos, podrán conocer igualmente de este tipo de litigios, siempre que ambas partes se hayan sometido voluntariamente al procedimiento.

A la vista de ello, se proyecta crear una Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero que opere como cauce adecuado para resolver las reclamaciones de los clientes en el ámbito de los tres sectores financieros (banca, valores y seguros y fondos de pensiones), cuyas finalidades serán:

- Aumentar la protección de los clientes de las entidades financieras.
- Aumentar la seguridad jurídica en el ámbito de las normas de conducta que deben observar las entidades financieras.
- Contribuir a la extensión de prácticas comunes en las relaciones de las entidades financieras con sus clientes, con unos estándares adecuados y comunes de protección, en el que se fortalezca la transparencia, la inclusión financiera de los colectivos vulnerables y la competencia en cuanto a calidad del servicio, en beneficio del conjunto de la sociedad.

El sistema de resolución de reclamaciones que prevé implantarse con la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero es eficiente, en la medida que es gratuito y puede presentarse por todo tipo de cliente ya sean personas físicas o jurídicas. Las reclamaciones serán instruidas y resueltas conforme a derecho por personal imparcial, independiente y especializado.

La resolución será vinculante para la entidad financiera cuando el importe reclamado sea inferior a un determinado umbral.

– Mejora de la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión.

La Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativa a la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión tiene como objetivo establecer una nueva regulación europea lo más armonizada posible, que atienda las particularidades del modelo de negocio de la prestación de servicios de inversión y a los diferentes grados de riesgo que pueden asumir o crear las empresas de servicios de inversión (ESI), garantizando un equilibrio entre los requisitos impuestos para mantener la solidez de las ESI y los costes de cumplimiento.

En este sentido, las ESI con un volumen total de activos inferior a 5.000 millones de euros quedarán sujetas al nuevo régimen prudencial de ESI y supervisadas por la autoridad competente nacional, es decir, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En esta categoría se distinguen también ESI pequeñas y no interconectadas (con un tamaño de balance inferior a 100 millones de euros, ingresos inferiores a 30 millones de euros y activos bajo gestión inferiores a 1.200 millones de euros). A estas ESI se les permite un régimen aún más adaptado a sus circunstancias en línea con el principio de proporcionalidad.

El régimen prudencial de las ESI actual (el de entidades de crédito aplicado a las ESI) se contiene en el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y sus normas de desarrollo.

El texto refundido de la Ley del Mercado de Valores ha sido modificado seis veces desde 2015. El Consejo de Estado ha sido muy crítico con las reformas parciales del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y ha reclamado en varias ocasiones la necesidad de elaborar una norma de nueva planta que reduzca al mínimo necesario el contenido de la ley, dejando lo demás a normas de desarrollo (reales decretos, órdenes ministeriales en caso de ser necesarias y circulares de la Comisión Nacional del Mercado de Valores).

Por tanto, la transposición de esta directiva debe realizarse en una Ley del Mercado de Valores de nueva planta y en normas de desarrollo, para garantizar que el texto resultante de la transposición es adecuado desde el punto de vista de la técnica normativa y la seguridad jurídica.

– Mejora de los instrumentos de inversión colectiva y en particular de su régimen de distribución transfronteriza.

La Directiva (UE) 2019/1160 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE, se orienta a mejorar las condiciones para la inversión colectiva transfronteriza avanzando en la estrategia de des-bancarización de la economía europea y facilitando el acceso a la inversión de los clientes minoristas entre los distintos Estados miembros.

La transposición de esta directiva puede servir para incorporar otras mejoras del funcionamiento de los fondos de inversión o los fondos de capital-riesgo, que facilite su utilización como fuente de financiación para las empresas, alternativa al canal bancario.

– Mejora del clima de negocios y fomento de la creación y el crecimiento de empresas.

Existe abundante evidencia de que la regulación del clima de negocios constituye un determinante significativo del crecimiento. Por ello, la política económica debe prestar especial atención a la reforma del marco institucional, es decir, de las reglas de juego en las que se desenvuelve la actividad económica. Aunque la posición de España en los diversos indicadores internacionales ha mejorado estos últimos años, sigue habiendo un margen de mejora que debe aprovecharse para no verse adelantado por otros países con impulsos reformistas.

Por ello, en 2023 se prevé impulsar diversas reformas previstas en la normativa (en este sentido, por ejemplo, se está tramitando la aprobación de una nueva Ley de creación y crecimiento de empresas, así como la transposición de la Directiva de insolvencia). Estas medidas estarán dirigidas a mejorar el clima de negocios en España para incentivar la creación y crecimiento de empresas. El tamaño de las empresas está intensamente correlacionado con su productividad. Por tanto, la política económica debe incidir sobre los obstáculos al crecimiento empresarial, para facilitar que las empresas alcancen un tamaño que les permita ser competitivas en el contexto internacional, y alcanzar un nivel de productividad lo más elevado posible.

Las reformas se dirigen, por ejemplo, a eliminar el número de trámites que deben llevar a cabo los emprendedores al iniciar un negocio o en el quehacer diario de la empresa, así como a reducir el coste de dichos trámites.

En particular, se pondrán en marcha iniciativas que eliminen las barreras a la creación y crecimiento empresarial, contribuyendo así al crecimiento de la productividad

que es, a largo plazo, el principal factor determinante del crecimiento potencial de la economía, con dos objetivos básicos:

- El impulso de la creación de empresas.
- El fomento de su crecimiento, tanto a través de la mejora regulatoria y eliminación de obstáculos a las actividades económicas como mediante el apoyo financiero al crecimiento empresarial.

Asimismo, se procederá a la transposición de la Directiva de reestructuración e insolvencia y se introducirán otras reformas en el ámbito concursal con el objetivo de disponer de instrumentos ágiles y eficaces que mejoren los procedimientos de insolvencia y faciliten el mantenimiento de empresas viables.

De igual modo, se prevén reformas orientadas a incentivar el cumplimiento de los plazos de pago que establece la normativa con el fin de eliminar las trabas que los problemas de liquidez y gestión financiera suponen para las empresas, en especial las de menor tamaño, que a la postre también limitan su crecimiento.

2. SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Tal y como establece el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Secretaría de Estado para la Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), bajo la superior dirección de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ejercerá las funciones previstas en el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el ámbito de sus competencias, relativas a la política de impulso a la digitalización de la sociedad y economía de forma respetuosa con los derechos individuales y colectivos, así como los valores del ordenamiento jurídico español. A tal fin, le corresponden las funciones de fomento y regulación de los servicios digitales y de la economía y sociedad digitales, la interlocución con los sectores profesionales, industriales y académicos, el impulso de la digitalización del sector público y la coordinación y cooperación interministerial y con otras Administraciones Públicas respecto a dichas materias, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros departamentos ministeriales.

Con carácter general, la SEDIA realiza el estudio, propuesta y ejecución de la política general y la planificación estratégica y de acción sobre la transformación digital de los bienes y servicios de la economía y la sociedad, así como la elaboración y propuesta de la normativa para la ordenación y regulación en estas materias, en consonancia con las disposiciones nacionales, europeas e internacionales vigentes.

Están adscritas al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de esta SEDIA, la Entidad Pública Empresarial Red.es., M.P (Red.es) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España M.P (INCIBE), que desempeñan un papel relevante en la ejecución de las políticas públicas en materia de digitalización y ciberseguridad.

En particular, Red.es desempeña un papel esencial en la ejecución y despliegue de los planes previstos para la digitalización de España y la convergencia digital con Europa para mejorar los servicios públicos y desarrollar la economía digital. Red.es desarrolla programas de impulso de la economía digital, la innovación, el emprendimiento, la formación para jóvenes y profesionales y el apoyo a PYMES mediante el fomento de un uso eficiente e intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Igualmente, INCIBE trabaja para afianzar la confianza digital, elevar la ciberseguridad y la resiliencia y contribuir al mercado digital de manera que se impulse el uso seguro del ciberespacio en España. INCIBE está consolidada como entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de ciudadanos, red académica y de investigación, profesionales, empresas y especialmente para sectores estratégicos. Con una actividad basada en la investigación, la prestación de servicios y la coordinación con los agentes con competencias en la materia, INCIBE contribuye a construir ciberseguridad a nivel nacional e internacional.

La SEDIA desarrolla sus funciones a través de la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial, así como a través de la Secretaría General de Administración Digital (SGAD), cuya finalidad es desarrollar y armonizar los sistemas para el conjunto de la Administración General del Estado e impulsar la transformación digital de la misma.

De acuerdo con el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial dependen directamente las siguientes subdirecciones generales:

- La Subdirección General de Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales.
- La Subdirección General de Economía del Dato y Digitalización.
- La Subdirección General para la Sociedad Digital.
- La Subdirección General de Talento y Emprendimiento Digital.

Además, depende directamente de la Secretaría de Estado como órgano directivo, la Secretaría General de Administración Digital, con rango de Subsecretaría.

La Secretaría General de Administración Digital es el órgano directivo al que corresponde, entre otras cosas, y bajo la autoridad de la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la dirección, coordinación y ejecución de las competencias atribuidas al Departamento en materia de transformación digital de la administración, incluyendo el desarrollo técnico y aplicación de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, y su normativa reglamentaria, en lo que concierne a la actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

De la Secretaría General de Administración Digital dependen directamente las siguientes subdirecciones generales:

- La Subdirección General de Planificación y Gobernanza de la Administración Digital.
- La Subdirección General de Impulso de la Digitalización de la Administración.
- La Subdirección General de Infraestructuras y Operaciones.
- La Subdirección General de Servicios Digitales para la Gestión.
- La Subdirección General de Presupuestos y Contratación TIC.

2.1. Actuaciones de política de digitalización e inteligencia artificial

- Plan España Digital 2026.

El 23 de julio de 2020, el Presidente del Gobierno presentó la Agenda Digital 2025, en cuyo planteamiento se diseña una política de Estado con características de reforma estructural, con una movilización de inversión pública y privada de grandes dimensiones, para impulsar la Transformación Digital de España como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad, y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan estas nuevas tecnologías.

Acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a la micropymes y las startups constituye uno de los elementos principales de la Agenda España Digital. En este sentido es pertinente señalar que la digitalización de la economía pasa por la transformación de las empresas para adoptar nuevos procesos, invertir en nuevas tecnologías y la formación de su personal, aplicar las tecnologías digitales a la transformación de su negocio y lograr así un aumento de su productividad, de su competitividad y de su rentabilidad futura.

En julio de 2022 el Gobierno actualiza la Agenda España Digital (España Digital 2020-2026), para adaptarla al horizonte 2026, mejorar su alineamiento con el Plan de Recuperación e impulsar proyectos estratégicos de gran impacto a través de la colaboración público-privada y la cogobernanza con las comunidades autónomas.

La actualización de la agenda España Digital incorpora las prioridades para el futuro y dos nuevos ejes transversales referidos a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) y la iniciativa RETECH, una red de proyectos estratégicos emblemáticos transformadores en el área digital propuestos por las comunidades autónomas.

Las inversiones previstas en la agenda España Digital durante la primera fase del Plan de Recuperación se reforzarán con las transferencias adicionales y los créditos asignados de los fondos europeos Next Generation.

“España Digital 2026” actúa en tres dimensiones clave: infraestructuras y tecnología, economía y personas. La agenda mantiene los diez ejes estratégicos de su versión inicial, añadiendo además dos nuevos ejes transversales para impulsar proyectos estratégicos de gran impacto a través de la colaboración público-privada y la cogobernanza del Estado y las Comunidades Autónomas.

Las actuaciones en el ámbito de la SEDIA permiten avanzar en la implementación de “España Digital 2026” para que éstas puedan llegar al conjunto de la sociedad, principalmente tienen gran repercusión en los siguientes ejes estratégicos del mismo:

➤ Reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía (meta 2025: 80% de personas con competencias digitales básicas, de las que el 50% serán mujeres). El reto para 2026 es reforzar las competencias digitales de la fuerza laboral y del conjunto de la ciudadanía, reduciendo las brechas digitales; completar la transformación digital de la educación; garantizar la formación en competencias digitales a lo largo de la vida laboral; y aumentar el porcentaje de especialistas digitales en la economía española consiguiendo una paridad de género en este colectivo.

➤ Reforzar la capacidad española en ciberseguridad, consolidando su posición como uno de los polos europeos de capacidad empresarial (meta 2025: 20.000 nuevos especialistas en ciberseguridad IA y Datos). El reto para 2026 es incrementar las capacidades de ciberseguridad en España, fomentar el desarrollo del ecosistema empresarial en este sector (industria, I+D+i y talento), y potenciar el liderazgo internacional del país en materia de ciberseguridad.

➤ Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas (meta 2025: 50% de los servicios públicos disponibles en app móvil). Con miras a 2026 se seguirá impulsando el proceso de transformación digital del sector público, tanto en la Administración General del Estado como en las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, consolidando con ello el liderazgo internacional de España en materia de servicios públicos digitales.

➤ Acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a las micropymes y las startups (meta 2025: 25% de contribución del comercio electrónico al volumen de negocio PYME). Hasta 2026 el reto es acelerar la digitalización de las empresas con especial atención a pymes y startups y crear las condiciones favorables para el surgimiento y maduración de empresas emergentes de base tecnológica.

➤ Acelerar la digitalización del modelo productivo mediante proyectos tractores de transformación sectorial que generen efectos estructurales (meta 2025: 10% de reducción de emisiones CO2 por efecto de la digitalización). Los retos para 2026 es impulsar la doble transición verde y digital mediante proyectos estratégicos transformadores que aumenten la competitividad, la productividad, el crecimiento y el empleo de calidad, así como consolidar transformaciones estructurales, sostenibles y perdurables sobre el conjunto de la economía y la sociedad.

➤ Favorecer el tránsito hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial (meta 2025: 25% de empresas que usan IA y Big Data). Hasta 2026 se continuarán impulsando actuaciones para cumplir con los objetivos del país: fomentar un marco ético y normativo para el despliegue de la IA; impulsar el I+D+i; fomentar la atracción de talento nacional e internacional; impulsar la creación de infraestructuras de datos y tecnológicas; e integrar la IA en las cadenas de valor del tejido industrial.

➤ Garantizar los derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno digital (meta 2025: una carta nacional sobre derechos digitales). Los retos para 2026 se centran en garantizar los Derechos Digitales de la ciudadanía en el nuevo entorno digital; difundir e incorporar los principios de la Carta de Derechos Digitales en instrumentos normativos que faciliten su aplicación en las diferentes esferas de la sociedad; y fomentar el humanismo tecnológico.

➤ Impulsar la colaboración público-privada a través de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación.

➤ Apoyar la puesta en marcha de proyectos emblemáticos de carácter interterritorial con redes territoriales de cooperación tecnológica (RETECH).

En línea con las funciones que le corresponde ejercer a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, se identifican posibles convenios, contratos, encargos a medios propios y otros instrumentos jurídicos que requieren ser objeto de financiación de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, permitiendo avanzar en el fomento y regulación de los servicios digitales y de la economía y sociedad digitales, en la interlocución con los sectores profesionales, industriales y académicos, en el impulso de la digitalización del sector público y en la coordinación y cooperación interministerial y con otras Administraciones Públicas respecto a dichas materias.

Se debe tener en cuenta que, con la aprobación en 2021 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, las actuaciones llevadas a cabo por la SEDIA se han reforzado presupuestariamente, poniendo en marcha una primera fase de inversiones públicas en digitalización para el periodo 2021-2023. Los proyectos vinculados a la financiación anterior tienen un horizonte de ejecución de 2023 o 2025. Asimismo, la SEDIA tiene vinculación con las siguientes Componentes y Reformas/Inversiones:

- Componente 12. Inversión 1. Espacios de datos sectoriales para contribución a proyecto tractores de digitalización de los sectores productivos estratégicos.
- Componente 13. Inversión 1. Emprendimiento. I+D+i+Digitalización
- Componente 13. Inversión 3. Digitalización e Innovación. I+D+i+Digitalización
- Componente 14. Inversión 2. Programa de Digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico.
- Componente 15. Inversión 7. Ciberseguridad: Fortalecimiento de las capacidades de ciudadanos, PYMES y profesionales; e Impulso al ecosistema del sector.
- Componente 16. Reforma 1. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
- Componente 18. Inversión 6. Data Lake Sanitario
- Componente 19. Inversión 1. Competencias Digitales transversales
- Componente 19. Inversión 4. Profesionales digitales
- Componente 21. Inversión 5. Mejora de infraestructuras digitales, el equipamiento, las tecnologías, la docencia y la evaluación universitarios.

Particularmente, desde la SEDIA se llevan a cabo múltiples tareas de digitalización e inteligencia artificial, tales como:

- La elaboración, formulación, coordinación y evaluación de planes o iniciativas de digitalización, como la Estrategia española de Inteligencia Artificial.

- El desarrollo normativo, aspectos éticos y regulación en materia de la digitalización, inteligencia artificial y demás tecnologías habilitadoras digitales (computación en la nube, tecnologías del lenguaje e imágenes, Internet de las cosas, tecnologías de registro distribuido, ciberseguridad, gestión de datos, entre otras), talento y emprendimiento digital y sociedad digital para la transformación de la economía y la sociedad.

- La participación en comisiones, grupos de trabajo y otros foros de carácter internacional o nacional, tanto públicos como privados.

- La definición y gestión coordinada de los programas, convocatorias de ayudas y actuaciones de impulso y fomento de la I+D+i en el ámbito de la digitalización e inteligencia artificial, incluyendo las políticas relacionadas con el emprendimiento y sociedad digital.

- El impulso, coordinación y ejecución de los planes y líneas de actuación con entidades públicas en digitalización e inteligencia artificial en colaboración con el conjunto de agentes del sector con los correspondientes programas e iniciativas de la Unión Europea y con otros programas internacionales.

- La participación en los distintos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTEs) a través de inversiones específicas, siendo de especial relevancia el PERTE de la Nueva Economía de la Lengua, en el que la SEDIA tiene especial relevancia en la puesta en marcha de proyectos tractores en el eje transversal “Base de conocimiento en español y lenguas cooficiales” y el eje “Inteligencia Artificial en español”. La participación en la estrategia Europa Digital a través de distintas iniciativas, entre la que destaca el Sandbox Normativo sobre Inteligencia Artificial, o el Digital Europe Programme, en el marco del Comité en el que participan los estados miembros.

Las actuaciones previstas se llevarán a cabo analizando la viabilidad y las ventajas que ofrecen los distintos instrumentos jurídicos más adecuados, tanto a través de procedimientos de compra pública innovadora, formalización de convenios con entidades públicas, realización de contratos con entidades privadas, o procedimientos de concurrencia competitivas.

Con esta finalidad, en el proceso de elaboración por parte la Secretaría de Estado en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 se ha contemplado la dotación

de créditos presupuestarios para la realización actuaciones en diversos capítulos presupuestarios, que requieren de la financiación de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

- Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales.

Aprovechar las oportunidades que presenta la disrupción de tecnologías digitales con un gran impacto transformador en la economía y la sociedad es un reto al que debe hacer frente esta SEDIA. A tal efecto, la SEDIA continuará desarrollando la Estrategia española de Inteligencia Artificial en colaboración con otros departamentos, órganos u organismos con competencias en esta materia. En particular, afrontará el reto de hacer frente al desarrollo normativo, los aspectos éticos y la regulación en materia de inteligencia artificial y demás tecnologías habilitadoras digitales para la transformación digital. Asimismo, aportará el impulso y fomento de la I+D+i en el ámbito de la inteligencia artificial (datos abiertos aplicados a la inteligencia artificial) y resto de las tecnologías habilitadoras digitales (computación en la nube, tecnologías del lenguaje e imágenes, Internet de las cosas, tecnologías de registro distribuido, etc.) en los sectores productivos de la economía y de la sociedad.

En concreto, se prevé la Creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial conforme con el previsto Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de Inteligencia Artificial (Ley de Inteligencia Artificial).

Esta Agencia actuará con plena independencia orgánica y funcional de las Administraciones Públicas, de forma objetiva, transparente e imparcial, llevando a cabo medidas destinadas a la minimización de riesgos significativos sobre la seguridad y salud de las personas, así como sobre sus derechos fundamentales, que puedan derivarse del uso de sistemas de inteligencia artificial. Estas medidas incluirán actuaciones propias, actuaciones en coordinación con otras autoridades competentes, cuando sea aplicable, y actuaciones de apoyo a entidades privadas.

Entre otras funciones, la Agencia Estatal se encargará del desarrollo, supervisión y seguimiento de los proyectos enmarcados dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, así como aquellos impulsados por la Unión Europea, en particular los relativos al desarrollo normativo sobre inteligencia artificial y sus posibles usos.

- Economía del dato y digitalización.

Para acelerar la transformación digital de la economía y la sociedad es necesario disponer de los marcos regulatorios, de las infraestructuras y de las capacidades

adecuadas para facilitar la generación y la compartición de datos y el desarrollo de los procesos de digitalización.

La SEDIA, mediante planes, programas, proyectos y actuaciones, impulsará la incorporación de las tecnologías y servicios digitales y el empleo masivo de los datos en la transformación digital de todos los sectores productivos de la economía, potenciando la compartición de datos entre los ciudadanos, las empresas y las Administraciones Públicas, en coordinación con las agendas sectoriales de digitalización de otros departamentos ministeriales. Así mismo, impulsará planes, programas, proyectos, actuaciones e instrumentos que fomenten el desarrollo y despliegue de servicios digitales, capacidades e infraestructuras que contribuyan a acelerar los procesos de transformación digital, y en particular la digitalización y el empleo masivo de los datos.

Con la creación de la Oficina del DATO en la SEDIA se da respuesta, entre otros, a los retos en materia de gobernanza del dato, que ha sido identificado por la Comisión Europea como uno de los problemas que impiden que Europa alcance su potencial en la economía de los datos.

La Oficina del DATO se encarga de:

- El diseño de las estrategias, políticas y marcos de referencia en materia de gestión para la incorporación de las tecnologías del dato, la compartición de datos entre empresas, ciudadanos y Administraciones Públicas y el empleo masivo de los datos en los sectores productivos de la economía.

- El diseño, impulso y coordinación de modelos de gobernanza y desarrollo de políticas en las materias que se señalan en el apartado anterior en cooperación con otros departamentos y Administraciones Públicas y el sector empresarial.

- Sociedad digital y ciberseguridad.

El desarrollo seguro y confiable de la transformación digital del país es objetivo crítico de la política de esta SEDIA. Para ello, se hace imprescindible la supervisión, el impulso y la coordinación de iniciativas para la garantía del derecho a la confianza y seguridad digital, y en especial a la protección de los menores y colectivos vulnerables, así como regulación en materia de ciberseguridad de los servicios digitales, en colaboración con otros órganos u organismos con competencias en la materia, así como con los sectores económicos y sociales públicos y privados afectados.

Cobra especial relevancia la elaboración y propuesta de normativa en materia de servicios digitales y sus prestadores, en particular sobre identificación electrónica y servicios electrónicos de confianza, comercio electrónico y nombres de dominio de Internet,

así como en lo referente a la regulación de las plataformas digitales, entre otras, la relativa a la privacidad y protección de la información y la propiedad intelectual, así como a la garantía de equidad y respeto a los derechos digitales de usuarios y empresas, para lo que se trabaja en la elaboración y adopción por parte del Gobierno de España de una Carta de Derechos Digitales, en cumplimiento de lo previsto en la Agenda “España Digital 2026”.

Se destaca en el plano regulatorio, de forma no exhaustiva, la legislación europea en negociación como la Digital Services Act (DSA), la Data Governance Act (DGA), la Data Act (DA), la Revisión de la Directiva (UE) 2016/1148 de seguridad de redes y sistemas de información (NIS 2), la revisión del Reglamento (UE) 910/2014 de identificación electrónica y los servicios electrónicos de confianza (eIDAS 2), o el Reglamento (UE) de privacidad (ePrivacy) en las comunicaciones electrónicas, que se une a normativa promulgada como el Reglamento (UE) 2019/1150 Platform-2-Business (P2B), el Reglamento (UE) 2018/1807, de libre circulación de datos no personales en la Unión Europea, o el Reglamento (UE) 2018/302, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico. En relación con la legislación nacional, destaca la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información, y su desarrollo a través del Real Decreto 43/2021, de 26 de enero.

Lo referido en el apartado anterior ha de venir necesariamente acompañado del ejercicio de las facultades de supervisión, control, inspección y sanción en materia de la sociedad digital, de conformidad con la legislación aplicable mencionada *ut supra*.

La SEDIA seguirá asumiendo el ejercicio de las facultades relativas a los nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es) que tenga atribuidas el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como el seguimiento y participación en iniciativas y foros relacionados con la Gobernanza de Internet, con objeto de mantener una red global, abierta, segura, libre y accesible.

– Competencias Digitales.

Corresponde a la SEDIA:

➤ El impulso, coordinación y apoyo a las iniciativas para la capacitación profesional en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y de programas de atracción, desarrollo y retención del talento digital.

➤ La elaboración, gestión y seguimiento de planes, proyectos y programas de actuaciones orientados al desarrollo de habilidades digitales en coordinación con otros

departamentos ministeriales, así como la definición y gestión coordinada de esta política con los correspondientes programas europeos e internacionales en estas materias.

➤ El diseño y desarrollo de planes y programas destinados a fomentar el acceso y uso de los servicios digitales por los ciudadanos y facilitar la disponibilidad y accesibilidad de las tecnologías digitales, contribuyendo a la corrección de las brechas digitales en coordinación con otros departamentos ministeriales con competencias en otras políticas con las que esas materias estén relacionadas.

Para llevar a cabo las mismas se desarrollan los siguientes programas y medidas:

– Desarrollo del Plan Nacional de Competencias Digitales (PNCD). El Plan comprende las actuaciones de todos los departamentos ministeriales en este ámbito, favoreciendo el desarrollo de sinergias con otras Administraciones Públicas, universidades y con el sector privado. Esta estrategia se organiza en cuatro ejes: I. Competencias digitales transversales; II. Transformación Digital de la Educación; III. Competencias digitales para el empleo; IV. Profesionales digitales.

El desarrollo del PNCD supone la puesta en marcha de los siguientes programas:

➤ Ciudadanía digital. Campaña de difusión y sensibilización dirigida a la ciudadanía sobre la importancia de formarse en competencias digitales.

➤ Ciudadanía digital. Formación competencias digitales básicas. En colaboración con las CCAA se articularán distintos programas de formación en competencias digitales básicas.

➤ Ciudadanía digital. Formación de personas desempleadas demandantes de empleo.

➤ Ciudadanía digital. Formación niñas y mujeres. Formación en competencias digitales transversales y para aumentar la empleabilidad de las mujeres en sectores TIC, donde, tradicionalmente tienen poca presencia.

➤ Formación en competencias digitales para PYMES, programa de formación de agentes del cambio y de directivos de pymes.

➤ Desarrollo de un programa de atracción y retención de talento digital.

– Desarrollo del Programa Educa en Digital en colaboración con las Consejerías de Educación de las CCAA y del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comprende un conjunto de acciones para apoyar la transformación digital del

sistema educativo mediante la dotación de dispositivos, recursos educativos digitales, adecuación de las competencias digitales de los docentes, y acciones que conlleven la aplicación de la inteligencia artificial a la educación personalizada.

Los objetivos que se pretenden conseguir con las actuaciones anteriores son los siguientes:

- Mejorar las competencias digitales básicas de la ciudadanía y cerrar brechas entre colectivos, formando a aquellos colectivos que encuentran más dificultades para adquirir estas competencias (mayores, personas jubiladas, personas con bajos niveles de renta, etc.).
- Dotar de competencias digitales avanzadas al alumnado y fomentar vocaciones digitales.
- Atender la demanda del mercado laboral de especialistas en tecnologías digitales.
- Dotar a los trabajadores de las competencias digitales requeridas en el ámbito laboral, así como a los desempleados para aumentar su empleabilidad.
- Fomentar el emprendimiento digital.

Las actuaciones realizadas en esta área corresponden a las competencias de la SEDIA siguientes:

- El desarrollo normativo, impulso, coordinación y apoyo de iniciativas para promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo de las empresas digitales en colaboración con otras unidades y departamentos.
- El impulso, coordinación y apoyo de iniciativas a la creación de contenidos digitales, y demás iniciativas que promuevan el desarrollo de empresas tecnológicas en sectores estratégicos para la transformación e inclusión digital en colaboración con otros departamentos, órganos u organismos.
- La promoción y asistencia a la internacionalización de las empresas de tecnologías digitales, de la sociedad digital y de contenidos digitales, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría de Estado de Comercio.

Los programas a desarrollar durante 2023 son los siguientes:

- La Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE), plataforma virtual que actúe como punto de encuentro, aglutine esfuerzos y sirva de referente a PYMES, autónomos y empresas de nueva creación en todo lo relativo al emprendimiento digital.

- Ley de startups. El objetivo de esta Ley es crear un marco normativo e institucional que favorezca la creación y desarrollo de las empresas emergentes (startups), empresas innovadoras, de rápido crecimiento que generan empleo estable y de calidad y básicas para el desarrollo de la economía digital.

- Puesta en marcha del fondo de fondos Fond-ICO Next Tech dirigido a la financiación de empresas emergentes y en crecimiento. Programa de colaboración entre los distintos centros ligados al emprendimiento. Durante 2023 se desarrollará un programa para fomentar proyectos de colaboración entre los centros promotores de la transformación digital y del emprendimiento, para que puedan ofrecer servicios avanzados a las startups.

- Apoyo a la creación y consolidación del ecosistema emergente de innovación del sector público. El programa de apoyo al GovTech tiene como objetivo acercar la innovación generada por startups, scaleups y pymes digitales a los retos que las instituciones públicas españolas afrontan en el momento actual.

Con estas medidas se pretende alcanzar los siguientes objetivos:

- Impulsar el emprendimiento digital nacional e internacional residente en España.

- Fomentar la proyección internacional del emprendimiento digital nacional.

- Impulsar el desarrollo del ecosistema de apoyo a las startups.

- Fortalecer el sector del capital privado en España para startups y empresas en crecimiento (scaleups).

- Atraer teletrabajadores del resto del mundo.

2.2. Administración Digital

La Administración Pública debe ser líder en la transformación digital y desde la SEDIA se potenciará especialmente este papel de referente en la digitalización y la adopción de las tecnologías digitales disruptivas, entre ellas la inteligencia artificial.

A tal efecto, desde la Secretaría General de Administración Digital se pretende liderar el impulso, la programación y la supervisión de las actuaciones en ejecución de la política de Gobierno en materia de administración digital y del fomento de la administración electrónica, en especial lo referente al proceso de transformación digital e innovación de la Administración a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, y la adopción de soluciones digitales que permitan la prestación eficiente de los servicios públicos incluyendo los servicios públicos esenciales.

Cobra especial trascendencia la promoción, en un marco de corresponsabilidad, de la cooperación con las Administraciones Públicas en materia de administración digital, potenciando el uso de los servicios de información titularidad de la SEDIA para eliminar la brecha digital, así como el fomento de programas de atención al ciudadano y, en particular promoviendo el uso de plataformas comunes para la integración de los servicios de las diferentes sedes electrónicas de las Administraciones Públicas.

La Secretaría General de Administración Digital continuará avanzando en la creación de servicios públicos electrónicos universales y de calidad, y en su caso transfronterizos, así como en el desarrollo de los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad. También liderará la racionalización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y la definición de los medios y servicios comunes digitales, incluidos los declarados compartidos, así como, cuando proceda, su provisión, explotación y gestión para el conjunto de las Administraciones Públicas.

En materia de ciberseguridad, la Secretaría General de Administración Digital asume la dirección del Centro de Operaciones de Ciberseguridad que contribuye al desarrollo de la política de ciberseguridad de esta SEDIA en el ámbito de la Administración General del Estado.

La SGAD es el órgano directivo al que corresponde la dirección, coordinación y ejecución de las competencias atribuidas en materia de administración digital, racionalización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y del funcionamiento del Servicio Común de Sistemas de Información y Comunicación.

La SGAD constituye uno de los pilares fundamentales para el despliegue de los servicios digitales en la Administración contribuyendo, a través de una prestación de calidad en dichos servicios, a la confiabilidad por parte de los ciudadanos para el uso de los mismos.

Para el año 2023 la SGAD continuará con su trabajo de mejora de los servicios prestados, potenciando la robustez de los mismos, desplegando asimismo nuevas iniciativas en el ámbito de la seguridad que permitan una mayor confianza por parte de los ciudadanos en los servicios de la Administración e incorporando mejoras en las infraestructuras que soportan dicho crecimiento para asegurar la calidad en la prestación de los citados servicios.

Asimismo, se continuará con el impulso de la digitalización de las Administraciones Públicas definido como una de las metas de “España Digital 2026”,

contribuyendo así a la Transformación Digital de España, siendo esta, una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad, y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan estas nuevas tecnologías, asegurando el respeto a los valores constitucionales y europeos, y la protección de los derechos individuales y colectivos.

3. SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES

Tal y como establece el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO), bajo la superior dirección de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ejercerá las funciones previstas en el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el ámbito de sus competencias, relativas a la política de impulso al sector de las telecomunicaciones, de los servicios de comunicación audiovisual, el despliegue de infraestructuras digitales y de telecomunicaciones, así como de los servicios necesarios para garantizar la conectividad de los ciudadanos y empresas, e impulsar la productividad y el crecimiento económico. A tal fin, le corresponden las funciones de fomento y regulación del sector de las telecomunicaciones, de las infraestructuras digitales y de los servicios de comunicación audiovisual, la interlocución con los sectores profesionales, industriales y académicos y la coordinación o cooperación interministerial y con otras Administraciones Públicas respecto a dichas materias, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros departamentos ministeriales, en particular al Ministerio de Cultura y Deporte, y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La SETELECO tiene entre sus objetivos el establecimiento, ordenación, reglamentación, coordinación, potenciación, control y desarrollo de las telecomunicaciones y de los servicios que tienen su base en las mismas, la resolución de controversias entre operadores y usuarios de telecomunicaciones y de los servicios digitales, en los términos previstos en la normativa vigente, así como de los servicios de comunicación audiovisual, con el propósito de mantener una política unificada que dé satisfacción a las necesidades públicas y privadas.

Complementario al objetivo de la SETELECO señalado previamente, las actuaciones llevadas a cabo desde la SETELECO de fomento de las redes robustas de telecomunicaciones, modernización de las mismas y conectividad tienen como objetivo reducir la brecha digital social y geográfica, utilizando para ello las tecnologías de

conectividad más adecuadas en cada caso. En particular, la transversalidad de la tecnología 5G precisará del fomento e identificación de casos de uso de éxito para su pronta implantación y desarrollo, creando e impulsando de forma dinámica los ecosistemas necesarios y confiables y asegurando las facilidades necesarias para dar el soporte de conexiones 5G preciso.

El Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación, estableció entre sus objetivos la realización del Esquema Nacional de Seguridad de redes y servicios 5G, la inspección y la capacidad sancionadora del mismo.

De igual modo, se encuentra entre sus objetivos el impulso del sector audiovisual, su fomento, regulación e interlocución con los actores industriales y profesionales del mismo. Sin perjuicio de las competencias de otros departamentos, entre sus objetivos se encuentra favorecer la internacionalización del sector, así como la adopción por el mismo de las tecnologías que favorezcan su digitalización.

La consecución de dichos objetivos repercute en el alcance de otro objetivo fundamental, como es el de coadyuvar al proceso de desarrollo e implantación del plan “España Digital 2026”, elemento central para alcanzar la digitalización dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Agenda actualizada del Gobierno servirá para impulsar la transformación digital de España como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad, y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan estas nuevas tecnologías. Para ello, desde la Secretaría de Estado se promocionan las tecnologías de la información y las comunicaciones en la empresa y en el conjunto de la sociedad, incentivando el proceso de generación y desarrollo de estas tecnologías, con el fin de favorecer la capacidad de absorción tecnológica de las empresas y su digitalización. La consecuencia es el fortalecimiento de los sectores y mercados de rápido crecimiento, pero también del proceso de creación y desarrollo de empresas de base tecnológica, especialmente las de tecnología de carácter habilitador y disruptivo.

Para ello, “España Digital 2026” recoge un conjunto de medidas, reformas e inversiones, articuladas en diez ejes estratégicos, alineados a las políticas digitales marcadas por la Comisión Europea para el nuevo periodo, cuya financiación se escala con el Fondo de Reconstrucción habilitado por la Unión Europea para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria derivada de la expansión de la COVID-19. De estos diez ejes, la SETELECO contribuye de forma decisiva en tres de ellos:

- Garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas (*meta 2025: 100% de la población con cobertura 100 Mbps*).

- Continuar liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5G, incentivando su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial (*meta 2026: 100% del espectro radioeléctrico preparado para 5G*).

- Mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio, trabajo, e inversión en el ámbito audiovisual (*meta 2026: 30% de aumento de la producción audiovisual en España*).

Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se han incluido dos componentes que facilitarán alcanzar estos tres objetivos. De un lado, el componente “Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G”, que vehícula las actuaciones para la consecución de los dos primeros objetivos. Por otro lado, el componente “España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub)”, que contiene las reformas e inversiones que facilitarán alcanzar el tercero de los objetivos. Las actuaciones de este último componente cuya implementación correspondía a la SETELECO, han sido realizadas en su totalidad en 2021. Dichos componentes no son elementos ad-hoc contruidos para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sino que se inspiran a su vez en tres de los planes en que se despliega “España Digital 2026” para articular cada una de las tres prioridades enumeradas, y que son, respectivamente, “Plan para la Conectividad e Infraestructuras Digitales”, “Estrategia para el Impulso de la Tecnología 5G” y “Plan España Hub Audiovisual de Europa”.

El citado Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, desarrolla la estructura orgánica básica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

De la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales depende directamente la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, que se estructura en las siguientes subdirecciones generales:

- La Subdirección General de Ordenación de las Telecomunicaciones.
- La Subdirección General de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

- La Subdirección General de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico.
- La Subdirección General de Inspección de las Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
- La Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y Servicios Digitales.
- La Subdirección General de Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

Dependen, asimismo, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones.

3.1. Actuaciones en materia de política de telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales

Los objetivos anteriores se desarrollarán mediante las siguientes políticas prioritarias, coherentes con la estrategia “España Digital 2026” y cuyos principales instrumentos se han incluido dentro del Plan de despliegue que comprende “Plan para la Conectividad”, “Estrategia de impulso al despliegue de 5G” y articulado como reformas e inversiones dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del componente 15 destinado: “Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G”. Además, dentro del Plan de Impulso al Sector Audiovisual, se van a poner en marcha varias medidas de ayudas como complemento a las contempladas dentro del componente 25 destinado al “Plan Spain Audiovisual Hub” en 2023.

3.2. Una regulación flexible y avanzada en materia de telecomunicaciones e infraestructuras digitales

La labor normativa en materia de telecomunicaciones va a ser muy intensa en los próximos años, debido principalmente a que la aprobación de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones va a exigir la aprobación de todo un amplio y completo desarrollo reglamentario y de iniciativas normativas:

- La tramitación de proyectos normativos en el seno de la Unión Europea exigirá la intervención de la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual en el asesoramiento, tramitación y negociación en las instituciones europeas de un conjunto de iniciativas normativas que, posteriormente, una vez aprobadas en la UE, deberán ser asimismo incorporadas al ordenamiento jurídico

interno. Teniendo en cuenta los objetivos y planes de trabajo tanto de la Comisión Europea como de la Presidencia alemana del Consejo de Ministros, en los próximos meses se trabajará de manera intensa en los siguientes proyectos normativos europeos:

- Reglamento de protección de datos en servicios de comunicaciones electrónicas y privacidad (Reglamento e-privacy).
- Revisión de la Directiva para reducir los costes en el despliegue de las redes de alta velocidad (Directiva BBCost).
- Revisión del Reglamento de Roaming.
- Digital Services Act.

Propuestas adicionales en la Protección de Infraestructuras Críticas.

- La incorporación al ordenamiento jurídico español del Reglamento de protección de datos en servicios de comunicaciones electrónicas y privacidad (Reglamento e-privacy).

Este Reglamento, que se tramita desde 2016, tiene como objetivo establecer normas relativas a la protección de los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas y jurídicas, en el ámbito de la prestación y utilización de servicios de comunicaciones electrónicas, siempre y cuando se encuentren en el territorio de la Unión Europea.

Es probable que la tramitación europea de esta iniciativa normativa culmine el próximo año, por lo que habrá que proceder a la incorporación al ordenamiento jurídico español de una norma tan conflictiva y vidriosa como es el Reglamento de protección de datos en servicios de comunicaciones electrónicas y privacidad (Reglamento e-privacy).

- La Comisión Europea ha anunciado la presentación a finales de año de una propuesta para modificar la Directiva para reducir los costes en el despliegue de las redes de alta velocidad (Directiva BBCost).

– Asimismo, la Comisión Europea también ha anunciado la presentación a finales de año de una propuesta para modificar la Directiva de roaming, cuyo período de vigencia terminó en 2021, por lo que hay que ampliar y mejorar dicha norma.

- La elaboración y desarrollo reglamentario de la nueva ley de seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación, que establezca requisitos de seguridad específicos para el despliegue y la explotación de redes de comunicaciones electrónicas y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas basados en la tecnología 5G.

A consecuencia de esta intensa labor normativa en materia de telecomunicaciones se hace necesario por parte de la SETELECO:

- Participar en las distintas organizaciones internacionales, no solo para la elaboración y aplicación de las normas armonizadas, sino también para el apoyo del sector, mediante la activa colaboración en congresos y exposiciones específicas en materia de telecomunicaciones, y la monitorización del servicio de telecomunicaciones por satélite.

- Asesoramiento de carácter técnico, jurídico y económico en el ejercicio de las funciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en los distintos aspectos de seguimiento, control y supervisión, tanto en la elaboración y cumplimiento de las normas, como en la coordinación de las distintas actuaciones.

- Impulsar, tramitar y controlar el cumplimiento de la normativa reguladora de la seguridad de las redes de comunicaciones electrónicas y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas con tecnología 5G.

3.3. Mejora de la disponibilidad y la calidad de los servicios de telecomunicaciones y servicios digitales

Forman parte de las actuaciones de esta política:

- La supervisión de las obligaciones de los operadores en materia de calidad en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y de los derechos de los usuarios digitales.

- El incremento de las actividades inspectoras, incluyendo la comprobación técnica de emisiones radioeléctricas, la resolución de interferencias perjudiciales, la vigilancia del mercado de equipos de telecomunicaciones necesarias para verificar que la prestación de los servicios y la puesta en el mercado de equipos se efectúa conforme a las condiciones establecidas. En este sentido, la aprobación de la Directiva 2014/53/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, obliga a dotar a la administración nacional de unos mecanismos de vigilancia del mercado de equipos de telecomunicación mucho más exigente, coordinada con el resto de las actividades europeas en esta materia y con medios suficientes para poder hacer frente a este tipo de actividades.

Con objeto de reducir las cargas administrativas y racionalizar los medios disponibles en los Servicios de Inspección de las Telecomunicaciones se desarrollará el artículo 91.6 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones por el que

se acuerda la sustitución de la inspección previa por una certificación de un titulado competente. En paralelo se articulará un plan específico de inspección para comprobar la exactitud y veracidad de dichas certificaciones para seguir garantizando el máximo nivel de control por parte de la Administración. También con dicho objeto, se traspasará a los servicios centrales la tramitación de los expedientes de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios, de forma que pueda incrementarse la actividad de inspección “in situ” en este ámbito.

– El mantenimiento y la actualización del laboratorio de ensayos y de la red de comprobación técnica de emisiones radioeléctricas incluyendo el equipamiento fijo, móvil y portátil necesario para cubrir las nuevas tecnologías y servicios de telecomunicaciones, con el fin de poder resolver las interferencias perjudiciales que se produzcan, verificar la calidad de las nuevas redes de las telecomunicaciones que se desplieguen y permitir que las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones atiendan las incidencias relacionadas con las telecomunicaciones y la conectividad que se presenten en sus respectivos territorios.

3.4. Administración eficiente del uso del dominio público radioeléctrico

El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público cuya titularidad y administración corresponden al Estado. La competencia para su administración y gestión está atribuida al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

El espectro radioeléctrico es un recurso natural y limitado, que es ampliamente utilizado para la prestación de una gran variedad de servicios de radiocomunicaciones, como los servicios de telefonía móvil, las comunicaciones por satélite, radiodifusión sonora y televisión, radionavegación aeronáutica, seguridad, transporte e investigación científica, médica y del espacio exterior, radioastronomía, etc., además de un elevado número de aplicaciones industriales y domésticas. Se trata por tanto de un recurso imprescindible, soporte de multitud de redes de telecomunicaciones incluidas las comunicaciones por satélite, que permite el desarrollo de la conectividad digital y de nuevos servicios disruptores y catalizadores para el crecimiento económico, al ser el soporte de la tecnología 5G y futura 6G.

España cuenta asimismo con importantes estaciones de investigación que utilizan el espectro radioeléctrico para obtener información del estado de la tierra o bien información del universo exterior, que permiten contribuir tanto al desarrollo sostenible como al conocimiento científico y cuyo funcionamiento se debe proteger en todos los ámbitos, para que puedan seguir utilizando el espectro radioeléctrico que precisen.

El espectro radioeléctrico tiene un gran valor estratégico y económico, y existe una gran demanda del mismo, por lo que se debe garantizar el uso eficiente de este recurso limitado y escaso, promoviendo dicho uso como factor de desarrollo económico. Asimismo, se debe garantizar un acceso equitativo, transparente y no discriminatorio a los recursos del espectro radioeléctrico.

Forman parte de las actuaciones para la administración del dominio público radioeléctrico:

- La planificación de frecuencias para los diferentes servicios de radiocomunicaciones, y el establecimiento de las condiciones para su uso.
- La elaboración y desarrollo del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) y de los de los Planes Técnicos Nacionales de Radiodifusión y Televisión.
- La gestión y asignación de recursos ORBITA ESPECTRO.
- El otorgamiento, modificación, extinción y revocación de los títulos habilitantes para uso del espectro.
- La gestión del registro público de concesiones.
- La gestión y fomento del servicio de radioaficionados.
- Los procesos para la liberación de bandas de frecuencias para destinarlas a su uso por nuevas tecnologías de comunicaciones inalámbricas.
- El desarrollo de los procesos de licitación de las bandas de frecuencias con limitación de recursos disponibles.
- Las actuaciones relativas al mercado secundario del espectro.
- La aprobación de los proyectos técnicos de las estaciones radioeléctricas, que garantice la compatibilidad radioeléctrica entre los diferentes usos del espectro, sin que se produzcan interferencias.
- Garantizar el respeto a las servidumbres radioeléctricas establecidas, para la protección de determinados servicios.
- La realización de consultas públicas con respecto al destino y mecanismos de autorización del espectro radioeléctrico.
- Fomento del uso compartido del espectro mediante mecanismos regulatorios innovadores.

- La participación en los grupos de la Unión Europea encargados de establecer la política en materia de espectro radioeléctrico a nivel europeo y de su armonización. En particular, el Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico (RSPG), y el Comité del Espectro Radioeléctrico (RSC).

- La participación en los organismos internacionales de radiocomunicaciones: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Conferencia Europea Postal y de Telecomunicaciones (CEPT), y otros grupos internacionales para la armonización de los usos del espectro.

- La cooperación y coordinación con los organismos públicos para dotarles de forma eficiente de espectro radioeléctrico para el ejercicio de sus funciones. En particular con el Ministerio de Defensa, a través de la Comisión Interministerial de los Servicios de Telecomunicaciones que utilizan el dominio público radioeléctrico para la Defensa Nacional.

- La negociación y firma de los acuerdos de coordinación internacional de frecuencias con los países vecinos.

- La coordinación con diferentes entidades internacionales (NASA, Agencia Espacial Europea, ONU) de las necesidades de frecuencias y las condiciones para su uso de las estaciones terrenas de investigación espacial, exploración de la Tierra por satélite y operaciones espaciales, que tienen en España (Robledo de Chavela, Maspalomas, Villafranca del Castillo, Cebreros, Quart de Poblet).

Adicionalmente a las actuaciones para la administración del dominio público radioeléctrico citadas, es necesario realizar actividades de comprobación técnica del espectro que permiten obtener datos válidos para evaluar la utilización real del espectro, verificar la conformidad de las señales transmitidas y alimentar los registros de frecuencia, conformándose en una herramienta esencial de apoyo a las actividades de gestión del espectro.

Las actuaciones de comprobación técnica de emisiones radioeléctricas proporcionan un sistema de verificación para cerrar el bucle del proceso de gestión del espectro. Por todo ello, la actividad de comprobación técnica y, en los casos en los que proceda, el ejercicio de la función inspectora, son de vital importancia para asegurar el uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico.

Con el objeto de mejorar la experiencia del usuario de los servicios de telecomunicaciones e infraestructuras digitales, así como de actualizar, mejorar y evolucionar las funcionalidades de los diversos bien inmateriales de uso en la gestión, se

continuarán realizando inversiones de carácter inmaterial con la implementación de las siguientes medidas:

- Sistema integrado de planificación del espectro radioeléctrico.
- Control de la calidad de los servicios digitales ofertados por los operadores y profundización en los planes de mejora de la atención a los usuarios de redes de banda ancha y de las medidas de protección a los usuarios.
- Continuidad de las acciones puestas en marcha con el Plan de Mejora de la Atención a los Usuarios de Telecomunicaciones y que tiene por objeto el fomentar una dinámica de mejora continua de la protección de los derechos de los usuarios.
- Transparencia en el seguimiento y control de la calidad de los servicios digitales ofertados por los operadores y profundización en los planes de mejora de la atención a los usuarios de redes de banda ancha y de las medidas de protección a los usuarios.
- Mejorar las funcionalidades de los sistemas y herramientas utilizados, así como la adquisición de nuevos sistemas de software y sistemas de información.
- Evolución, generación y adquisición de nuevas herramientas con el objetivo de agilizar las actuaciones a tal fin.

Por último y a fin de ejecutar las actuaciones necesarias para el fomento de la demanda, se mejorará el procedimiento de identificación de las zonas sin cobertura mediante asistencias técnicas especializadas en operación de la Plataforma de georreferenciación con la obtención de información georreferenciada por calle y número de portal. El uso de esta herramienta favorecerá el desarrollo de la demanda proporcionando información cartográfica actualizada sobre niveles de cobertura y permitirá contar con los indicadores estándar de cartografía de banda ancha.

3.5. Desarrollo de las tecnologías 5G

Las oportunidades que la implantación del 5G puede proporcionar a la sociedad y la economía deben aprovecharse reforzando el liderazgo que ya tiene España y dando continuidad a la creación de ecosistemas y casos de uso de éxito, así como apoyando la innovación de servicios digitales 5G y las adecuadas infraestructuras digitales que permitan su desarrollo. Por ello dentro de la estrategia “España Digital 2026” se ha desarrollado una hoja de ruta para el impulso del despliegue de la tecnología 5G en España la “Estrategia para el impulso de la Tecnología 5G”.

La estrategia nacional del impulso al despliegue de 5G abarcará aspectos fundamentales para disponer de las infraestructuras necesarias y del entorno confiable preciso que permita el temprano desarrollo e implantación de servicios 5G en España. La financiación de una parte sustancial de estas medidas se realizará con los Fondos de Reconstrucción habilitados por la Unión Europea dentro del componente “Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los objetivos de este componente son adaptar el sector de las telecomunicaciones a los requisitos de la Estrategia Digital Europea y reforzar la cohesión económica, social y territorial mediante la eliminación de las brechas digitales y el aumento del acceso a la cobertura ultrarrápida en todo el territorio nacional.

El componente apoya la implantación acelerada de la tecnología 5G:

- Mediante la puesta a disposición de los recursos de espectro necesarios en las bandas prioritarias de 5G.
- Mediante el desarrollo de un entorno de implantación fiable y seguro.
- Mediante el fomento del desarrollo de aplicaciones de tecnología 5G.

También tiene por objeto apoyar una cultura de ciberseguridad sostenible en favor de ciudadanos y empresas.

El componente responde a las recomendaciones específicas por país sobre la focalización de la política económica de inversión en el fomento de la innovación (recomendación específica por país 3 de 2019), y sobre la consignación anticipada de proyectos de inversión pública maduros y la concentración de las inversiones en la transición digital (recomendación específica por país 3 de 2020).

Asimismo, es necesario situarse a la cabeza en los procesos de desarrollo e innovación respecto de la futura tecnología 6G para disponer de la capacitación académica, técnica, empresarial y de fabricación que permita abrir nuevas vías de creación de empleo, así como formar parte de su diseño.

Entre las actuaciones a llevar a cabo para conseguir estos objetivos se encuentran:

- Desarrollo de la estrategia nacional de impulso al despliegue de 5G para reforzar la posición de liderazgo de España, desarrollar un entorno confiable para el despliegue de servicios 5G y apoyar su despliegue temprano.

- Asignación de las bandas identificadas como prioritarias a nivel europeo para los despliegues 5G, en el caso de España, la asignación de la banda 694-790 MHz (700 MHz) y la banda de 25,25 a 27,5 GHz (26 GHz) y la reorganización de la banda de 3,6 a 3,8 GHz (3,6 GHz). Este objetivo está a falta de la subasta de 26 GHz que se producirá durante el 2022.

- Seguimiento del despliegue 4G y 5G y actuaciones relacionadas con el impulso e implantación sostenida del 5G en España.

- Aprobación del Plan de actuaciones para garantizar la compatibilidad del despliegue de las redes 5G en la banda 700 MHz, con la prestación del servicio de televisión digital terrestre en la banda adyacente inferior.

- Revisión de los Acuerdos internacionales de coordinación de frecuencias, para adaptarlos a las condiciones armonizadas en la Unión europea, para el uso de las diferentes bandas de frecuencias con tecnología 5G.

- Cooperación y coordinación institucional para el desarrollo 5G y fomento de la participación e investigación en 6G.

- Seguimiento de pilotos 5G.

- Ciberseguridad en las infraestructuras digitales 5G.

- Soporte para el desarrollo de corredores de transporte 5G.

- Refuerzo de la Oficina Técnica del Plan Nacional 5G.

- Participación en los foros internacionales 5G y 6G e impulso de las acciones que marque la Comisión Europea.

- Adecuación de los medios y procedimientos de comprobación técnica a las características y a las bandas de frecuencias identificadas como prioritarias para la tecnología 5G.

3.6. Extensión y mejora de la disponibilidad de las nuevas redes de telecomunicaciones

La conectividad digital se ha convertido en un elemento imprescindible en todos los aspectos de nuestras vidas. La pandemia lo ha puesto en evidencia con más crudeza: el teletrabajo y el entretenimiento digital han sido necesarios para aliviar el confinamiento, pero también los servicios de comercio electrónico, los servicios financieros a distancia y los servicios de Administración digital han contribuido a minimizar el daño del shock de oferta provocado por la crisis sanitaria de la COVID-19 y han servido para tratar de

mantener la actividad económica productiva, evitando que se convierta en shock de demanda y se alarguen en el tiempo los efectos de la crisis económica.

Las infraestructuras de telecomunicaciones en España han respondido al primer envite que ha supuesto la crisis sanitaria. A pesar de los fuertes incrementos de tráfico y los cambios en los hábitos de consumo y uso, las incidencias en la operativa de los servicios de comunicaciones no han superado los de un periodo normal.

Sin embargo, aún existen aspectos por mejorar en aquellos ámbitos en los que aún no se ha avanzado tanto, para que el resultado colectivo sea armónico y tenga un impacto real en la productividad y el bienestar de la sociedad española.

Por un lado, sigue siendo necesario atender las demandas más exigentes de conectividad a través de las infraestructuras digitales y las de redes de muy alta capacidad (VHC) como las basadas en fibra hasta el hogar (FTTH) o en los sistemas 5G.

Pero, además, será necesario mejorar la calidad de los servicios de banda ancha y la capacidad de red necesaria para que todos los ciudadanos disfruten de los servicios esenciales, sobre todo en las zonas rurales y las de baja densidad de población. Si el desarrollo de las redes de banda ancha era considerado antes de la crisis sanitaria un elemento clave para hacer frente al reto demográfico, su papel se ve reforzado tras la pandemia.

La necesidad de acceso a las nuevas herramientas como el teletrabajo, el comercio electrónico, la teleformación o incluso la teleasistencia han revelado con mayor crudeza la desigualdad de oportunidades a nivel socioeconómico y territorial. Esta situación no es sostenible y se trabajará para corregirla lo antes posible mediante la adopción de las medidas necesarias para atender con especial intensidad las necesidades de conectividad de los colectivos más vulnerables y los territorios más desfavorecidos, asegurando la igualdad de oportunidades y una mejor preparación para el porvenir.

Para todo ello se ha realizado el diseño y puesta en marcha de nuevos instrumentos de ayuda a la extensión de redes de banda ancha apoyados en la utilización del Fondo de Recuperación UE acordado en el Consejo Europeo Extraordinario celebrado el 18 de julio de 2020 y la coordinación con otras administraciones públicas y otros departamentos ministeriales que coadyuvan al objetivo de la mejora de la conectividad digital en sus respectivos ámbitos sectoriales. Estos instrumentos conforman el “Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales” bajo el paraguas de la estrategia “España Digital 2026” y son financiados por el componente “Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Alrededor del cual se realizarán, entre otras, las siguientes actuaciones:

- Favorecer la vertebración territorial mediante despliegue de redes: Extensión de la banda ancha ultrarrápida.
- Planificación y reglamentación técnica y en especial la cooperación con las Administraciones Territoriales en los despliegues de telecomunicaciones. Diseño y puesta en marcha de los nuevos instrumentos de ayuda y apoyo al despliegue de redes de banda ancha. Lanzamiento del Programa UNICO (Universalización de las Infraestructuras Digitales para la Cohesión).
- Impulso a la coordinación de los despliegues de las redes e infraestructuras digitales con las administraciones públicas. Hoja de ruta para la implementación de la Toolbox de Conectividad. Desarrollo del Proyecto de Ordenación de los Despliegues Físicos. Gestión del Proceso de Permisos y Licencias ante organismos públicos (Carreteras, Cuencas Hidrográficas). Acciones de refuerzo de conectividad en centros de referencia, en polígonos industriales y en centros logísticos. Refuerzo de la conectividad de los motores socioeconómicos públicos y privados impulsando su incorporación a la Sociedad del Gigabit.
- Diseño y puesta en marcha de nuevas acciones específicas para la extensión de la cobertura en los centros urbanos históricos con consideración de zona blanca.
- Mejorar la conectividad y el equipamiento de los centros que proporcionan acceso a los servicios asistenciales esenciales y sociales básica, tales como hospitales, centros de salud y centros de educación y formación.
- Bonos de conectividad para pymes y colectivos vulnerables.
- Mejora de la información disponible al público sobre infraestructuras disponibles y elaboración del Informe de cobertura anual sobre banda ancha en España.
- Renovación y sostenibilidad de infraestructuras en los edificios. Seguimiento y fomento del uso compartido de infraestructuras para la prestación de los servicios de telecomunicaciones tanto de redes públicas como las comunes en edificios.
- Centralización de las actividades de tramitación de las ICTs realizada hasta ahora por las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones.
- Impulso de España como hub de datos del sur de Europa. Definición de los proyectos IPCEI de Infraestructuras Digitales Transfronterizas (IDT): Cloud y satélites.
- Mejora de la conectividad de las Infraestructuras Digitales Transfronterizas que supone la participación de empresas españolas en consorcios de empresas para

proyectos de interconexiones de infraestructuras de datos y cable submarino del Mecanismo “Conectar Europa” (MCE2 Digital) y el nuevo RGECA. Actualización de los Servicios de Emergencia y de su regulación sobre el acceso al 112 y la implantación de AML (Advanced Mobile Location) y del sistema de envío de alertas a la población (PWS). Así como la coordinación con el Ministerio de Interior y las comunidades autónomas para la implementación de estas soluciones.

- Alineamiento con el sistema europeo de normalización (SNE) en lo que a redes de telecomunicaciones e infraestructuras digitales se refiere. Participación en el grupo de trabajo conjunto entre la Comisión y los organismos europeos de normalización (CEN/CENELEC y ETSI).

- Impulsar y acelerar el despliegue del 5G en los principales corredores de transporte (carreteras y ferrocarriles) tanto nacionales (corredores secundarios en determinadas zonas) como transfronterizos (corredores primarios).

- Despliegue del 5G en determinadas zonas con el objetivo de lograr la cobertura del 75 % de la población para el 31 de diciembre de 2025 en las bandas de preferencia 5G.

- Apoyo a la I + D relacionada con las redes 5G y 6G para ecosistemas de innovación y de ciberseguridad 5G.

3.7. Protección de los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas

Regulación y control del régimen de protección de los derechos de los consumidores y usuarios de las telecomunicaciones, a través de las siguientes actuaciones:

- Regulación de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas.

- Tramitación de reclamaciones de los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas y servicios digitales e información a dichos usuarios.

- Contestación de consultas de los usuarios a través de la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones.

- Supervisión y control de la prestación de los servicios de tarificación adicional.

- Supervisión de los contratos-tipo de los operadores de comunicaciones electrónicas.

– Aplicación del régimen sancionador por vulneración de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas.

Así mismo se procederá al mantenimiento de un centro de atención de llamadas que proporciona a los usuarios información sobre sus derechos como usuario de telecomunicaciones, así como asistencia para la interposición de reclamaciones.

La tramitación y resolución de reclamaciones por controversias entre usuarios y operadores de comunicaciones electrónicas. Se trata de un procedimiento administrativo con una resolución vinculante para los operadores.

Controlando las cláusulas de los contratos de los operadores, así como sus modificaciones, en particular las variaciones de los precios.

Supervisando la prestación de los servicios de tarificación adicional y servicios de información telefónica 118AB.

Aplicando el régimen sancionador por la posible vulneración de los derechos de los usuarios de este sector.

En el ámbito de estas actuaciones se procederá a realizar aquellas inspecciones necesarias en materia de cumplimiento de los derechos de los usuarios, que, en caso de detectar vulneraciones, den lugar a los correspondientes expedientes sancionadores.

3.8. Servicios de Comunicación Audiovisual

A partir de la aprobación de la Directiva (UE) 2018/1808 de 14 de noviembre de 2018 por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) habida cuenta de la evolución de las realidades del mercado, la SETELECO trabaja en el desarrollo de una regulación audiovisual que se adapte a los cambios producidos en los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales, a los nuevos modelos empresariales para su distribución, velando por un adecuado equilibrio normativo entre los diferentes tipos de prestadores de servicios de comunicación audiovisual y actores que operan en dicho mercado.

La aprobación de una nueva Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual va a exigir la aprobación de todo un amplio y completo desarrollo reglamentario.

La tramitación de proyectos normativos en el seno de la Unión Europea exigirá la intervención de la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual en el asesoramiento, tramitación y negociación en las instituciones europeas de un conjunto de iniciativas normativas que, posteriormente, una vez aprobadas en la UE, deberán ser asimismo incorporadas al ordenamiento jurídico interno. Teniendo en cuenta los objetivos y planes de trabajo tanto de la Comisión Europea como de la Presidencia alemana del Consejo de Ministros, en los próximos meses se trabajará de manera intensa en los siguientes proyectos normativos europeos como la Media Free Act.

Por otra parte, la SETELECO, dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital realiza las siguientes actuaciones en materia de ordenación de los servicios de comunicación audiovisual:

- Actuaciones de decisión sobre cualquier cuestión que afecte al ejercicio de los títulos habilitantes por parte de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual.
- La autorización de los negocios jurídicos sobre licencias de comunicación audiovisual.
- La llevanza del Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual.
- Y las funciones de gestión, liquidación, inspección y recaudación de las aportaciones a realizar por los operadores de telecomunicaciones y por los prestadores privados del servicio de comunicación audiovisual televisiva reguladas en la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.
- Participación en los grupos de trabajo de la Unión Europea encargados de establecer la política en materia de servicios de comunicación audiovisual a nivel europeo y su armonización.
- Elaboración de propuestas normativas sobre los contenidos digitales en el ámbito de las infraestructuras digitales, en particular sobre los modelos de negocio y su gestión, publicidad, protección de menores y usuarios, propiedad intelectual y la reutilización de la información del sector público.

Por último, dentro de la estrategia “España Digital 2026” se ha incluido un Plan para constituir España como plataforma destacada para la atracción de inversión nacional e internacional en el sector audiovisual. El Plan España Hub Audiovisual de Europa aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de marzo de 2021, tiene dos objetivos

específicos, a saber, la atracción de inversión exterior y la conversión de España en un polo de atracción del sector audiovisual y la reducción de los costes administrativos para llevar a cabo proyectos de producción audiovisual y mejorar la competitividad global de las empresas audiovisuales españolas. Entre las diferentes actuaciones que se recogen en este Plan destacan las siguientes que se realizarán a lo largo de 2023:

- Refuerzo de los instrumentos de apoyo oficial a la internacionalización de las empresas pertenecientes al sector audiovisual, poniendo especial énfasis en las empresas tecnológicas e innovadoras vinculadas a este sector.

- Mejora del acceso a recursos financieros por parte de las empresas del sector mediante un esquema de incentivos fiscales, concesión de avales por parte de Audiovisual Fianzas SGR, convocatoria de ayudas públicas por parte del Ministerio de Cultura y Deporte, complementándose con otras líneas en colaboración con ICO, ENISA o Red.es.

- Se considera imprescindible la elaboración con carácter anual de un informe del sector audiovisual español, que recoja una descripción de los distintos subsectores que conforman el sector, una evolución del mismo, analizando su aportación a la generación de valor de la economía en su conjunto y perspectivas de crecimiento, como complemento al Plan de Impulso al Sector Audiovisual.

- Puesta en funcionamiento de un programa de ayudas para el desarrollo de actuaciones dentro del Spain Audiovisual Hub, debido a que el sector de producción audiovisual es un sector dual en el que conviven grandes empresas muy digitalizadas y que compiten a nivel global, junto con una mayoría de empresas muy atomizadas. Estas últimas son empresas de pequeño tamaño o incluso microempresas, con una estructura empresarial débil y con procesos de actividad discontinua debido a las peculiaridades del sector, lo que redundará en dificultades de acceso a la financiación tradicional bancaria y a la captación de recursos financieros procedentes de mercados internacionales.

3.9. Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip).

Como parte de la estrategia “España Digital 2026” y dentro de su Eje 11. PERTE: “Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica” se incluyen once proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE). Son un nuevo instrumento de colaboración público-privada dentro de los cuales

se encuentra el PERTE Chip en el área de la microelectrónica y los semiconductores destinado a desarrollar las capacidades de diseño y producción de la industria de microelectrónica y semiconductores. Por ello, el Consejo de Ministros acordó en su reunión del 24 de mayo de 2022 a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la aprobación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip) en el marco Plan de Recuperación.

El PERTE Chip se configura como una iniciativa estratégica con el objetivo de desarrollar las capacidades de diseño y producción de la industria de microelectrónica y semiconductores de nuestro país de manera que se genere un importante efecto multiplicador no solo en los sectores tecnológicos, sino en el conjunto de la economía española.

Este proyecto se articulará mediante una serie de actuaciones concretas distribuidas en torno a cuatro ejes que abarcan diferentes ámbitos de la cadena de valor:

- Primer eje - refuerzo de la capacidad científica.
- Segundo eje - estrategia de diseño.
- Tercer eje - construcción de plantas de fabricación en España.
- Cuarto eje - dinamización de la industria de fabricación tic española.

Por otro lado, la gobernanza del PERTE recae en un grupo de trabajo interministerial, cuyo papel de impulso y coordinación de las actuaciones recae en el Comisionado Especial del Proyecto de Microelectrónica y Semiconductores, que se instrumenta a través de una Sociedad Mercantil Estatal. La SETELECO, ostentando la vicepresidencia del Grupo de Trabajo, es uno de los órganos responsables de la ejecución y de la coordinación operativa, por ello, entre las diferentes actuaciones previstas a lo largo de 2023, se ha incluido una destinada a apoyar la gobernanza del mismo.